

Sandra Carreras

**“Hay que salvar en la cuna
el porvenir de la patria en peligro...”
Infancia y cuestión social en Argentina (1870-1920)**

Los debates del Congreso Pedagógico de 1882 y la sanción de la Ley N° 1420 de Educación Común en 1884 colocaron a los niños en el primer plano de la política argentina. La niñez fue volviéndose cada vez más objeto de control estatal y disciplinamiento social. En ese proceso, la escuela pública, situada precisamente en el ámbito de interacción entre la familia y el Estado, asumió una tarea clave en virtud del consenso que fue difundiendo acerca de su eficacia para garantizar el pasaje del pasado colonial y caudillesco hacia un horizonte de modernidad y progreso (Carli 2002: 38).

La ley de 1884 estipulaba que la escuela primaria tenía por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de “todo niño de seis a catorce años de edad” (art. 1). De acuerdo con el Código Civil entonces vigente, “menores” eran los individuos de ambos sexos que no hubiesen cumplido los veintidós años. El Código distinguía entre “menores impúberes”, es decir los que no habían alcanzado aún la edad de catorce años y “menores adultos”, los que tenían entre catorce y veintidós años.¹ Esto significa que la interferencia estatal que quedaba establecida a través de la obligatoriedad escolar reforzaba la diferenciación ya establecida dentro del grupo de los menores, pues se aplicaba exclusivamente al grupo de “menores impúberes” mayores de seis años. Por otra parte, la ley no hacía distinción de raza ni nacionalidad, fomentaba la coeducación de niñas y niños hasta los diez años de edad (art. 10) y establecía un currículo mínimo común para ambos sexos, al que se agregaban, en el caso de las mujeres, nociones de economía doméstica y labores, y para

1 Código Civil (1872), Libro Primero de las Personas, Sección Primera, Título IX, art. 1 y 2.

los varones, ejercicios militares sencillos y nociones de agricultura y ganadería en las áreas rurales (art. 6).

No corresponde aquí presentar una historia del sistema educativo argentino ni de analizar tampoco en detalle los efectos de la Ley de Educación. Llama sin embargo la atención que, en lugar tan prominente como el artículo 2 del capítulo primero, es decir, en la parte dedicada a definir los “principios generales sobre la enseñanza pública de las escuelas primarias”, no sólo se estableció que la instrucción primaria sería “obligatoria, gratuita, gradual”, sino que la misma debía darse “conforme a los preceptos de la higiene”. Para no dejar lugar a dudas, el artículo 13 de mismo capítulo estipulaba que en toda construcción de edificios escolares, en cuanto a su mobiliario y los útiles de enseñanza, debían consultarse “las prescripciones de la higiene”. Los legisladores de entonces instalaron así la higiene en el sitio donde un lector moderno esperaría encontrar la pedagogía, es decir, no meramente como un contenido de enseñanza entre otros, sino como su marco de referencia. ¿Cómo se explica esto?

1. Los niños en la mira de los higienistas

La situación de la higiene pública era una cuestión que preocupaba a las autoridades argentinas desde hacía ya bastante tiempo. Hasta mediados del siglo XIX, los médicos diplomados eran escasos en las ciudades y brillaban por su ausencia en la campaña. Luego de la caída de Rosas (1852) se reabrió en Buenos Aires la Escuela de Medicina, que poco después adquirió la jerarquía de una facultad, impulsando la profesionalización del arte de curar. A partir de entonces, los médicos diplomados en las universidades nacionales pudieron ir asegurando su posición frente a sus competidores, a quienes comenzaron a tildar de ilegítimos, es decir, los médicos diplomados en el exterior, los adherentes a la medicina homeopática y los curanderos, probablemente mujeres en su gran mayoría (González Leandri 1999: 35-55).

La terrible experiencia de la fiebre amarilla, que azotó Buenos Aires entre 1870 y 1871 llevándose cerca de 20.000 víctimas, provocó que la cuestión de la higiene cobrara importancia en la esfera pública. En ese contexto se decidió en 1873 la creación de la Cátedra de Higiene como una área específica y la aplicación de importantes sumas provenientes de los recursos del Estado y de créditos externos a la

instalación del sistema de aguas corrientes y cloacas en la ciudad de Buenos Aires primero –tarea que en diferentes etapas y con varias interrupciones se extendió de fines de la década de 1860 hasta la primera década del siglo XX– y paulatinamente también en las demás ciudades del país (Lozano/Paitoví: 1925). En 1880 se creó el Departamento Nacional de Higiene y en 1883 la Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires, la cual tomó a su cargo organizar servicios de asistencia médica domiciliaria, asistencia hospitalaria y en asilos, asistencia en los consultorios de su casa central, y la asistencia de enfermos. En 1892 la institución adoptó el nombre de Administración Sanitaria y Asistencia Pública, y recibió mayores competencias encargándose de la administración de vacunas y de la inspección técnica de higiene.²

En el ámbito de estas instituciones desarrolló su actividad un grupo de funcionarios que elaboraron y llevaron a la práctica una serie de medidas, muchas de las cuales tuvieron a los niños entre sus principales destinatarios. Si bien los cargos directivos de estas entidades sufrieron cambios excesivamente frecuentes,³ siempre estuvieron conducidas por médicos, varios de los cuales, dada la permeabilidad existente entre las distintas áreas de la administración pública de la época, pudieron ejercer influencia también en el sistema educativo.

El caso más notorio es el de Eduardo Wilde (1844-1913), quien fue designado médico de sanidad del puerto poco después de haber completado sus estudios y cumplió una labor destacada durante la epidemia de fiebre amarilla en Montserrat, una parroquia porteña densamente poblada. Durante la Guerra del Paraguay ejerció funciones de cirujano del ejército. En 1874 fue designado profesor de la Facultad de Ciencias Médicas. Paralelamente actuó como diputado en la legislatura de Buenos Aires. En dos oportunidades (1880 y 1898) fue designado presidente del Departamento Nacional de Higiene. Durante la presidencia de Julio A. Roca ocupó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública (1880-1885), cargo desde el cual propulsó justamente la sanción de la Ley N° 1420, entre otras. Como ministro del Interior

2 Sobre la creación y desempeño de la Asistencia Pública véanse Penna/Madero (1910: II, 131ss.) y González Leandri (1989).

3 Luego de largas décadas de esfuerzos por lograr la continuidad, Emilio Coni llegó a la siguiente constatación: “La Asistencia Pública [...] cuenta casi con tantos directores como años de existencia” (1918a: XIX).

(1886-1889) del gobierno de Miguel Juárez Celman siguió ocupándose de la higiene pública. En 1901 fue delegado argentino ante el Congreso Internacional Sanitario celebrado en La Habana.⁴

Pero también hubo especialistas que, precisamente sin abandonar su campo específico, tanto más se ocuparon de la cuestión infantil, como Emilio Coni (1854-1928), conocido como el “decano de los higienistas”. Siendo aún estudiante, Coni se había hecho cargo de la redacción de la *Revista Médico-Quirúrgica* y pronto se convirtió en el iniciador de la estadística sanitaria, para terminar dedicando su vida a la higiene pública: fue miembro de varias comisiones municipales, director de la Asistencia Pública y Administración Sanitaria de Buenos Aires, director de los trabajos de saneamiento de las ciudades de Mendoza y Córdoba, fundador de la Liga Argentina contra la Tuberculosis, propulsor de varias iniciativas de sanidad pública, autor de numerosas publicaciones y ponente en congresos científicos nacionales e internacionales (Coni 1918a; Guy 1989).

En la biografía de Coni la preocupación por la infancia ocupa un lugar especial. Ya en sus primeros trabajos destacaba la necesidad de dar orientación científica a la puericultura y, preocupado por lo que juzgaba una alta tasa de mortalidad infantil, propuso medidas para combatirla. Si bien las prédicas de Emilio Coni y otros higienistas no surtieron efectos inmediatos, el aumento de los niños abandonados en plena crisis política y económica de 1890 convenció a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires de la necesidad de actuar. En ese año, un decreto municipal firmado Francisco P. Bollini creó una comisión especial compuesta por médicos y demógrafos⁵ encargada de investigar la cuestión y proponer soluciones. Los considerandos del decreto, que pretendían fundamentar la necesidad de convocar esta comisión “investigadora”, no contenían sólo una declaración de principios sino también un programa de intervención, pues allí se afirmaba:

4 Además de sus publicaciones científicas y periodísticas, Eduardo Wilde escribió numerosas obras literarias, que gozan de reconocido prestigio. Para mayores detalles sobre su vida véase *Eduardo Wilde, 1844-1913*. Buenos Aires: Talleres Casa Jacobo Peuser (1914).

5 Como integrantes de la comisión fueron designados los doctores Manuel Podestá, Emilio Coni, José Penna, Antonio Piñero y Eugenio Ramírez, y luego se incorporaron Alberto Martínez y el director de la Oficina de Estadística Municipal, Francisco Súnico.

que uno de los más altos deberes de la autoridad municipal es contribuir dentro de su jurisdicción a que la asistencia y la protección de la infancia se organice en el municipio *de acuerdo con los principios de la ciencia moderna*; que es urgente que una ley bien meditada determine a qué autoridades corresponde asumir la tutela de la infancia abandonada en el municipio [...].⁶

Si bien el programa de trabajos presentado por Emilio Coni (1918a: 356-362) en la primera reunión de la comisión contenía dos apartados sobre la elaboración de las estadísticas correspondientes para determinar las causas y las dimensiones del abandono de los niños y de la mortalidad infantil, no por eso los resultados obtenidos eran muy confiables, como reconocía el informe del Dr. Martínez, quien se había hecho cargo de la Estadística Municipal en 1888.⁷ Por otra parte, la mayor parte del plan de trabajo consistía ya en la enumeración de las medidas a adoptar, las cuales, como cabía esperar, reaparecieron resumidas en el encabezamiento del informe final publicado más de un año después. Entre ellas sobresalía el proyecto de creación del Patronato y Asistencia a la Infancia.

A ojos de los autores del proyecto, la institución debía asumir funciones muy amplias: ejercer su patronato sobre los niños pobres, enfermos, defectuosos, maltratados y moralmente abandonados; reglamentar y vigilar la lactancia de la clase pobre; investigar las condiciones de vida de los niños pobres; difundir nociones de higiene entre las familias; reglamentar el trabajo de la mujer en la industria para favorecer indirectamente a los niños; fomentar la creación de asilos de maternidad y de salas cunas; proteger la inspección higiénica y médica

6 Cit. según Coni (1918a: 354); el subrayado es mío. Es muy probable que el texto del decreto que designó a la comisión haya estado influenciado –si no incluso redactado– por el propio Coni, quien décadas más tarde declaró haber aceptado el cargo de director de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública con la intención de implantar por esa vía la institución del Patronato de la Infancia (1918a: 362).

7 El informe es muy explícito al respecto: “[...] quise estudiar de cerca la influencia que en las defunciones infantiles produce la alimentación de los niños, lo mismo que el estado civil de los padres [...] Esta investigación no ha dado desgraciadamente, resultado, no sé si por imposibilidad de obtener el dato, ó por indiferencia de los empleados encargados de pedirlo. Me ocupé también de formar una estadística de la morbilidad hospitalaria, ya que no era posible confeccionar una de la privada ó particular; y también fracasó esta tentativa, por las grandes dificultades que presentaron los directores ó médicos de los hospitales, tanto oficiales como particulares” (Martínez 1892: 1s.).

de las escuelas públicas, favorecer la creación de dispensarios; reglamentar y ejercer la vigilancia sobre el trabajo de los niños; ejercer la tutela de los niños “maltratados” o en peligro “moral” (Intendencia Municipal 1892: VII-IX).

2. La disputa por la dirección de las instituciones de asistencia a la infancia: ¿hombres de ciencia *versus* matronas caritativas?

En el mismo año de publicación del informe, el Patronato inició sus actividades, utilizando en parte para ello las instalaciones de la Asistencia Pública. Se abrió un dispensario para niños enfermos con consultorios externos, donde se suministraban medicamentos para niños pobres y se ponía a su disposición una sala de baños y una de gimnasia. Se organizó también un dispensario de lactantes, así como una oficina de nodrizas y un tambo modelo para la provisión de leche higiénicamente controlada. Se habilitó una exposición de higiene infantil, en la que se exhibían cunas y camas de distintos modelos, aparatos para medir el peso de los niños, biberones de diferentes formas, aparatos ortopédicos y de gimnasia, modelos de útiles y muebles escolares. Además se inició la publicación de la *Revista de Higiene Infantil*, con la intención de difundir preceptos higiénicos entre la población de manera amena (Coni 1918a: 366-371). En 1894 se instaló la primera sala-cuna para cuidar desde las 6:30 hasta las 19:00 horas a los hijos pequeños de las mujeres que debían salir de su hogar para trabajar (Meyer Arana 1911: vol. II, pp. 158-178).

El programa que había sido formulado en el informe de la comisión manifestaba la intención de los higienistas de colocar bajo su control las actividades de protección a la infancia y ampliar simultáneamente su capacidad de influencia. Pero pese a ello, en la redacción final del decreto de creación del Patronato, las autoridades municipales pusieron cuidado en subrayar que la tutela y protección de los niños abandonados no era una función exclusiva del poder público, sino que también correspondía a la filantropía y, por lo tanto, no podría ser eficaz sin la cooperación de la sociedad. Considerando que tampoco podía excluirse a la mujer de la “noble y elevada misión de amparar a los niños desvalidos”, el intendente municipal decretó que el presidente de la Comisión y director de la Asistencia Pública, Emilio Coni, solicitaría “el concurso de las señoras que, por su ilustración y posi-

ción social, est[uvieran] en condiciones de servir a los altos intereses de la institución [...]”⁸.

Fig. 1: Consultorio del Dispensario de Lactantes



Fuente: Penna/Madero (1910: I, p. 418).

De hecho, el Patronato no se constituyó como una institución realmente pública con un presupuesto estable. El notorio activismo de Emilio Coni, que en un principio ocupó la presidencia honoraria, no podía ocultar el hecho de que el Patronato no fue colocado bajo el control de expertos destacados por sus conocimientos científicos como él quería, sino de una comisión de caballeros provenientes de familias notables, quienes además contaban con la activa colaboración de las mujeres de su mismo grupo. Para los miembros de la Comisión Directiva:

la Sala-Cuna no podía existir sin el eficaz concurso de las damas. A la matrona argentina, tan acreedora al nombre de abnegada y caritativa, correspondía la tarea de organizarla, y de velar porque los niños encontra-

⁸ Citado según Coni (1918a: 365s.).

ran en ellas segundas madres que los atendiesen con cariño y espíritus bondadosos [...].⁹

Fig. 2: Esterilización y preparación de raciones en el Dispensario de Lactantes



Fuente: Penna/Madero (1910: I, p. 425).

Esta forma de presencia femenina, organizada en una comisión auxiliar que se ocupaba sobre todo de la adquisición de fondos y de la atención de los niños pequeños pero no integraba la comisión directiva, era compatible con la concepción que ya había sido expresada en uno de los informes presentados a la Intendencia Municipal:

Numerosas son las sociedades de beneficencia servidas y atendidas por señoras distinguidas [...]. No producen todos los beneficios que legítimamente producirían por falta de organización regular, iniciativas propias y administración bien preparada e inteligente; pero no se puede pedir más á la mujer que abnegadamente lleva su concurso generoso de caridad

⁹ Meyer Arana (1911: vol. II, p. 185). Sobre la administración del Patronato ver ibídem (vol. II, pp. 221-234) y Mead (1994: 131-134).

y perseverancia, en la tarea desinteresada de hacer el bien. Ellas no pueden estar preparadas en Buenos Aires, como lo están los hombres, para desempeñar bien las complicadas tareas de la administración a que se consagran de corazón y con verdaderos sacrificios, porque para ello se necesita algo más que se reduce á una mayor suma de instrucción. Hace falta, pues, que se organicen sociedades de beneficencia, con hombres instruidos y abnegados como directores [...] (Ramírez 1892: 163).

Sin embargo, la distribución jerárquica de los roles masculino y femenino que había adoptado el Patronato para su organización no era la única forma existente en las instituciones dedicadas al cuidado de la infancia en la Argentina. Muchas de ellas dependían directamente de la Sociedad de Beneficencia, la cual había sido fundada en 1823 como una sociedad de damas por decreto del gobernador de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo explícito de encomendarle las tareas sustraídas a las órdenes religiosas a raíz de la reforma eclesiástica. De acuerdo con el decreto de creación, entre sus atribuciones figuraban explícitamente la dirección e inspección de la Casa de Expósitos, la Casa de Partos Públicos y Ocultos, el Hospital de Mujeres, el Colegio de Huérfanas y “de todo establecimiento público dirigido al bien de los individuos de este sexo”.¹⁰

En 1882 la Sociedad fue nacionalizada y se le encargó la administración de establecimientos asistenciales dependientes del gobierno nacional. Su presupuesto provenía en su mayor parte de fondos públicos adjudicados a través del Ministerio del Interior. Durante toda su existencia, que se prolongó hasta 1947, la Sociedad de Beneficencia estuvo integrada exclusivamente por mujeres provenientes de la elite porteña que trabajaban estrictamente *ad honorem*. Contrariamente a lo que sucedía con el Departamento Nacional de Higiene y la Asistencia Pública, ni el gobierno nacional ni el municipal tenían injerencia en su composición ni en la designación de sus autoridades.¹¹ Más aún, la Sociedad fue capaz de obtener en numerosas oportunidades subsidios especiales del poder ejecutivo nacional, así como de resistir todos los intentos de la Facultad de Medicina por apropiarse de la Sala de Obstetricia primero y luego de todo el Hospital Rivadavia para sus prácti-

10 Decreto de creación de la Sociedad de Beneficencia, cit. según *Album Histórico de la Sociedad de Beneficencia de la Capital (1823-1910)*, s.p.

11 Sobre la historia y la organización de la Sociedad de Beneficencia véase sobre todo Little (1980).

cas y cursos.¹² Las socias también supieron elaborar un discurso de género funcional a la salvaguarda de sus intereses, ofreciendo voluntariamente su labor administrativa como la mejor garantía de que los dineros de la nación serían prudentemente aplicados a su “piadoso destino”, en momentos en que la construcción de los nuevos hospitales municipales a cargo de la Asistencia Pública consumían fondos importantes (Mead 2000). A fines de la primera década del siglo XX los asilos y hospitales regentados por la Sociedad de Beneficencia sumaban 2.742 camas, una cifra similar al número controlado por los organismos municipales, y su presupuesto era aún ligeramente superior al de la Asistencia Pública (Penna/Madero 1910: II, p. 248; Veronelli 1975: 33-41).

Las damas de la Sociedad y los higienistas de la Administración Sanitaria nacional y municipal compartían la voluntad de proteger a la infancia, pero eso no implica que las relaciones que mantuvieron entre sí fueran siempre cordiales. En 1889 se produjo un fuerte conflicto por el control de la Casa de Expósitos, institución establecida ya en la época colonial para recoger a los niños huérfanos y abandonados, y que desde 1823 era administrada por la Sociedad de Beneficencia. En esa disputa, las damas de la Sociedad, encabezadas por su presidenta Isabel Hale de Pearson, solicitaron al gobierno que dejara sin efecto la aplicación del reglamento que los funcionarios higienistas pretendían imponerle y que estableciera claramente que la dirección y la administración de la Casa estaba bajo la absoluta responsabilidad de la Sociedad, afirmando que de lo contrario se retirarían completamente de las tareas que hasta entonces habían desempeñado. El presidente Carlos Pellegrini optó por acceder al reclamo de las damas, provocando con ello la renuncia del presidente del Departamento Nacional de Higiene, el doctor Udaondo, quien –al igual que Coni– había fracasado en sus gestiones ante el poder ejecutivo nacional por lograr la centralización de los hospitales y servicios asistenciales.¹³

El fin que tuvo el episodio indica que a ojos del presidente de la nación, la renuncia del funcionario médico que encabezaba el Departamento Nacional de Higiene tenía efectos menos perniciosos que los

12 Archivo General de la Nación (AGN), Sociedad de Beneficencia, Leg. 160: Hospital Rivadavia, Exp. 8918.

13 Para mayores detalles sobre el desarrollo del conflicto entre la Sociedad de Beneficencia y los funcionarios higienistas, véase Mead (1994: 94-117).

que hubiera podido acarrear el retiro de las damas. Eso se explica, en parte, porque contra todas las aseveraciones de los higienistas, las matronas de la Sociedad de Beneficencia habían dado sobradas pruebas de su solvencia administrativa durante décadas. Se explica también por el hecho de que, pese a estas disputas, en la sociedad argentina existía un amplio consenso acerca de la relación especial que unía a las mujeres con los niños, sobre todo con los más pequeños, independientemente de que aquéllas fueran madres biológicas o no.

No sorprende entonces que en las declaraciones del Primer Congreso Femenino Internacional, organizado por la Asociación de Universitarias Argentinas en mayo de 1910 en coincidencia con los festejos del Centenario, la sección de “Sociología” estuviera dedicada casi exclusivamente a la cuestión de los derechos y la protección de las mujeres y los niños. Si bien estas mujeres profesionales tenían una visión bastante diferente de la tradicional acerca de cómo debía llevarse a la práctica tal protección, avanzaban aún más allá que las matronas en cuanto al concepto de la maternidad como categoría aplicable al género femenino en su totalidad, pues declaraban que toda mujer era “la madre natural de todo niño” (Primer Congreso Femenino Internacional 1910: 17).

La preocupación por los niños desprotegidos no sólo era propia de las mujeres de la elite y de las profesionales, sino que era una de las tareas primordiales a las que se abocaban diferentes asociaciones caritativas –en su mayoría, aunque no exclusivamente, católicas–, en cuyas actividades se involucraba también un gran número de mujeres de las capas medias e incluso a los estratos superiores de las clases populares. Uno de los ejemplos más notables de este tipo de asociaciones es el caso de las Conferencias de Señoras de San Vicente de Paul, que ya en 1891 contaba con 7.800 socias. Entre 1889 y 1914 las conferencias brindaron socorro a más de 120.000 familias, incluidos sus niños. Interviniendo por medio de visitas y asistencia directa lograron que más de 9.000 niños fueran legitimados ante las autoridades y que unos 30.000 recibieran el bautismo o la primera comunión. En sus escuelas se educaron 77.900 alumnas durante el mismo periodo (Mead 1994: 142-151; Ciafardo 1990: 96-102).

Como se ve, la protección a la infancia convocaba la atención de una variada gama de instituciones, organizaciones y grupos de personas. Pero ¿significa eso que todos ellos se preocupaban por los niños

en el mismo sentido y se ocupaban de ellos de la misma forma? ¿Es acaso válido colocar en el mismo plano las acciones de las instituciones gubernamentales con las actividades de las organizaciones caritativas? ¿A qué respondían sus acciones y qué objetivos perseguían?

3. La realidad de la protección a la infancia entre la ciencia, la caridad y el control social

Cuando la Intendencia Municipal convocó la comisión investigadora a la que hemos hecho referencia más arriba, tenía ya una idea prefigurada de los males que la comisión supuestamente se encargaría de estudiar. En efecto, el nombramiento de la comisión se fundamentaba en los siguientes términos:

Considerando que la mortalidad infantil en el municipio de la Capital es elevada; que uno de los factores de esta mortalidad es, indudablemente, el abandono de los niños recién nacidos; que la profilaxis del abandono es una de las cuestiones sociales más graves y que más interesa a la atención pública en todos los países civilizados; que existe, además, crecido número de niños abandonados por sus padres, expuestos a todas las seducciones del vicio y a caer fatalmente en la pendiente del crimen, siendo un deber de las autoridades sustraerlos a la influencia letal del medio que los pervierte; que el abandono de los recién nacidos aumenta considerablemente en el municipio; que es lógico suponer que este aumento crecerá con la escasez y dificultades propias de una crisis como la que atravesamos [...] (citado según Coni 1918a: 354).

Las principales soluciones propuestas para controlar la mortalidad infantil, el infanticidio y el aborto fueron controlar a las posibles madres delincuentes y brindar posibilidades a las mujeres de colocar a los recién nacidos como expósitos al cuidado de organizaciones caritativas. La posibilidad de hacerlo en forma anónima, que predominó hasta 1890, era una solución tendiente a no estimular el aborto preservando el honor de las mujeres. Pero ante el fuerte aumento de los abandonos como resultado de la grave crisis económica de ese año, la respuesta fue la eliminación del torno y el refuerzo del control sobre las madres, medidas que lejos de conducir al resultado deseado probablemente sólo lograron estimular el aumento de los abortos y los infanticidios (Ruggiero 1992: 372).

Todas estas estrategias dejaban completamente fuera de la mira la reluctancia de los hombres a hacerse cargo de la paternidad y reforzaban la importancia adjudicada a la maternidad. Al mismo tiempo, se

tendía a aumentar la intervención estatal en el ámbito de la reproducción. De acuerdo con la ley, las parteras formaban parte del sistema público de atención sanitaria, y se esperaba de ellas que actuaran como una verdadera policía ginecológica. El Estado les otorgaba una licencia, certificando así su idoneidad profesional, pero al mismo tiempo las obligaba a informar a la Asistencia Pública sobre todos los casos que trataran, incluyendo los nacimientos, los abortos y el estado y destino de todos los niños nacidos bajo su cuidado. Esto no era sólo una forma de fomentar la atención especializada de los partos y el desarrollo de esta profesión, sino también de incorporar a las parteras a la lucha contra “los crímenes maternos” empleándolas para controlar la situación de todas las mujeres embarazadas barrio por barrio.¹⁴

De acuerdo con los higienistas, la alta mortalidad infantil no resultaba sólo de la voluntad criminal de las madres, sino muy especialmente de su ignorancia. Para poner remedio a esto pusieron un gran empeño en la difusión de los preceptos de higiene y puericultura a través de conferencias y publicaciones destinadas a un público femenino amplio y, sobre todo, a través de los consejos distribuidos en los dispensarios de lactantes y de la incorporación de esos contenidos a la enseñanza escolar. Para combatir la alta mortalidad de niños menores de dos años causada por enfermedades gastro-intestinales, se colocó un énfasis muy especial en la cuestión del amamantamiento, que era presentado como una obligación de la madre y un derecho del niño, combinando argumentos científicos y morales:

Una madre debe criar siempre á su hijo; este es un deber que solamente podrá eludir cuando haya imposibilidad absoluta de llenarlo por enfermedad ó ausencia completa de la secreción láctea. Todas las leyes naturales y morales indican imperativa y racionalmente, que la mujer debe llenar esta función primordial para la vida del hijo. La religión católica no ha desconocido la grandeza obligatoria de este deber y lo ha consagrado en una de sus creaciones más sublimes, la de la Virgen María, amamantando á su hijo. Por otro lado, la ciencia con su positivismo científico demuestra por experiencias numerosas que la única leche que le conviene al niño en el primer tiempo de su vida es la que proviene de la madre; en caso contrario, las posibilidades de que sobreviva serán siempre muy difíciles (Agote 1901: 145s.).

14 Sobre el rol adjudicado a las parteras en la previsión y punición del infanticidio y el aborto cfr. Ruggiero (1992: 368-371).

Pese a todos los argumentos esgrimidos en pro del amamantamiento materno, no fue posible erradicar la práctica de contratar nodrizas.¹⁵ En vistas de ello, las autoridades sanitarias colocaron a las mujeres empleadas en esta tarea bajo su vigilancia. Con el objetivo declarado de preservar la salud de los niños lactantes, el Patronato –apenas creado– estableció el servicio de inspección de nodrizas y fomentó la sanción de una legislación al respecto. El servicio de inspección, que luego fue anexo a la Administración Sanitaria, se proponía certificar el buen estado de salud de las candidatas a emplearse y, a la vez, vigilar el desarrollo de sus hijos, ya que para trabajar como nodrizas, las mujeres debían ir a vivir a la casa de los patrones y dejar a su propio hijo en manos de otra mujer (Penna/Madero 1910: 410-431). Sin embargo, la legislación sancionada en 1910 por el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires establecía todos los controles conocidos con respecto al ama, pero no incluía varias de las restricciones que había querido imponer el autor del proyecto, el doctor Etchegaray, en el sentido de que no pudiera emplearse como ama ninguna mujer cuyo propio hijo fuera menor de tres meses. La ley tampoco prescribía la revisión médica del niño a criar, de modo que no se establecía ningún resguardo para evitar que las nodrizas pudieran ser contagiadas por un niño enfermo.¹⁶

Además de la lucha contra la mortalidad infantil, el programa de la Comisión convocada en 1890 incluía también la protección y asistencia directa a la infancia. En la mira de las autoridades estaban, en primer término, los niños abandonados y los niños pobres, cuyos padres no podían o no querían procurarles sustento a través de un trabajo considerado honrado. Como sugiere Karen Mead (1994: 126s.) los niños abandonados y los niños trabajadores, sobre todos los de la calle, representaban ante los ojos de los higienistas y de las autoridades en general, la manifestación de la destrucción del valor de la familia, y por tanto, su mera existencia significaba una amenaza al orden social, al menos a nivel simbólico.

15 Sobre la cuestión de la alimentación infantil y la práctica de la “lactancia mercenaria” véanse los capítulos correspondientes en Agote (1901) y Aráoz Alfaro (1922), además del estudio de Pagani/Alcaraz (1988).

16 Una evaluación de la normativa vigente en la primera década del siglo XX se halla en Zauchinger (1910).

Ya desde 1870 distintas fuentes habían comenzado a llamar la atención sobre la presencia de un gran número de niños en las calles de Buenos Aires, calificándolos alternativamente como trabajadores, pilluelos, vagos o delincuentes. Esta situación se explica por la escasez de espacios cerrados de vivienda y de trabajo. En los conventillos regía en general la prohibición de que los niños permanecieran en el patio durante el día, en tanto que el bajo desarrollo de la producción industrial hacía que el número de niños empleados en establecimientos fabriles fuera escaso en comparación con el registrado entonces en muchos de los países europeos. Las ocupaciones aptas para la participación de menores eran, en cambio, oficios callejeros como mensajeros, mendigos, lustrabotas y vendedores de billetes de lotería, diarios, etc.

Es por eso que gran parte de la vida de los niños pobres tenía lugar en la calle, estaba marcada por su temprana participación en el mundo del trabajo y en actividades que las autoridades definían como conductas transgresoras, cuando no lisa y llanamente como delictivas. Sus experiencias eran muy diferentes de las de los niños de la elite, cuya vida cotidiana estaba marcada por una educación en gran parte privada, encargada a institutrices en muchos casos extranjeras, y por su temprana preparación para asumir altas funciones sociales, y eran también bastante distantes de la cotidianeidad de los niños de los sectores medios, que se desarrollaba sobre todo en la escuela pública y en un contexto familiar más amplio pero hogareño (Ciafardo 1992: 11-47).

La comisión de higienistas que elaboró el proyecto de creación del Patronato de la Infancia, se preocupó especialmente por las condiciones de vida de los niños de los conventillos. De acuerdo con el informe del doctor Ramírez, su situación no sólo era muy difícil y precaria, sino que estaba rodeada de amenazas permanentes para su salud y su moral:

Los vicios, la falta de decencia de los vecinos, los de sus propios padres muchas veces, son los modelos que se ofrecen fáciles á la imitación infantil. La holgazanería, la falta de estímulos para la instrucción primaria, la falta de obligaciones de trabajo y distracciones honestas, los agrupa en los rincones de los grandes patios, en las calles apartadas ó en las plazas solitarias con propósitos perjudiciales y algunas veces desordenados, requieren la acción represiva de la policía de seguridad que los dispersa (Ramírez 1892: 175).

La comisión consideraba como niños maltratados no sólo a los que eran objeto de malos tratamientos físicos habituales o “excesivos” y a los que “a consecuencia de la negligencia culpable de los padres” estaban “privados de cuidados indispensables”, sino también a los empleados en oficios peligrosos y a los que “por hábito se entrega[ban] a la mendicidad, a la vagancia, al libertinaje”. En “peligro moral” se consideraba a los niños, cuyos padres vivían de la mendicidad o hubieran sido condenados por crímenes, robo o ultraje a las buenas costumbres (Intendencia Municipal 1892: IX). Uno de los informes insistía en que las autoridades municipales debían declarar los conventillos y las casas de inquilinato como establecimientos insalubres de primera clase y colocarlos bajo la vigilancia continua de los médicos-inspectores, los cuales se encargarían de visitar regularmente esas viviendas y llevar un registro general sobre los niños de los conventillos, especificando, entre otras cosas su edad, sexo, color, nacionalidad, época de destete, condición de la familia, etc. (Piñero/Podestá 1892: 277-281).

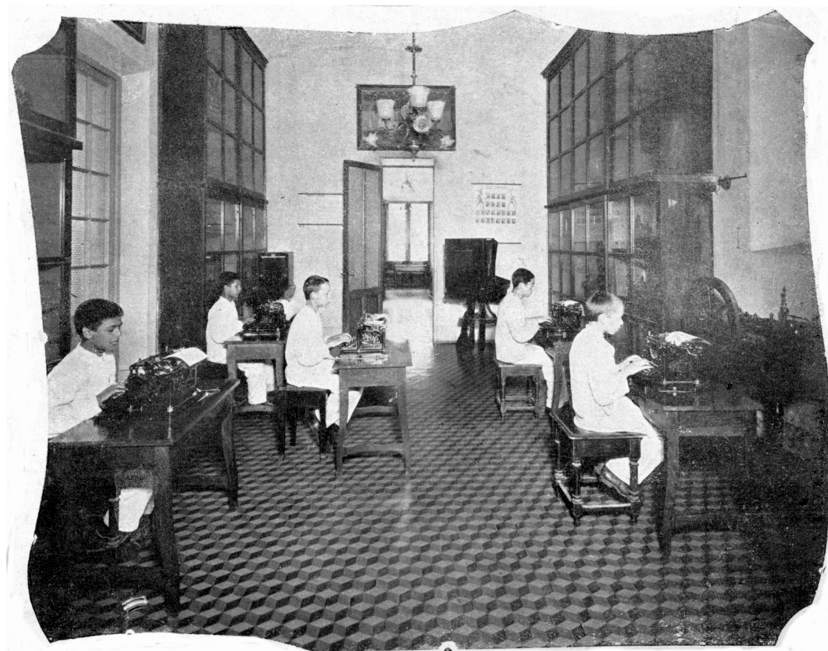
En la práctica, los niños desamparados y los delincuentes recibían un tratamiento similar, que consistía en separarlos de su medio y apartarlos de la calle, encerrándolos en asilos o instituciones correccionales según los casos. A ello se agregaba una instrucción en “artes y oficios” con el objetivo expreso de hacerlos “ciudadanos útiles”. En los casos en los cuales se consideraba que el peligro no era tan grave, la acción de las organizaciones caritativas y las instituciones sanitarias se orientaba a la vigilancia y el ejercicio de la tutela más o menos formalizada sobre los más diversos aspectos de la vida cotidiana de las familias pobres.

Muchos niños que se encontraban en las calles eran capturados por la policía y puestos a disposición de los defensores de menores. Cuando no se disponía de sitio suficiente para alojarlos, estos niños y adolescentes eran enviados a prisión, hubieran cometido delito o no (Guy 1994: 218-223).

La dimensión del problema puede intuirse considerando las cifras presentadas por la Sociedad de Beneficencia en su *Álbum* de 1910: hacia mediados de la década de 1880 la cantidad de niños ingresados por año a la Casa de Expósitos ascendía a 1.000 y continuó aumentando hasta llegar a casi 2.000 en 1909. Ese año, la Sociedad atendió en sus instalaciones a 3.300 niños huérfanos, para cuyo cuidado y ali-

mentación empleaba a más de 1.500 amas. La Sociedad no era la única institución que se ocupaba de los niños abandonados. Este esfuerzo era compartido por numerosas asociaciones caritativas, de las que han quedado escasos registros, de modo que no es posible calcular exactamente cuántos eran los afectados.¹⁷

Fig. 3: Clase de dactilografía en el Asilo de Huérfanos



Fuente: Álbum Histórico de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, 1823-1910.

Dada la afluencia constante de niños abandonados, la Sociedad de Beneficencia se esforzaba por distribuirlos entre las familias que se mostraban dispuestas a hacerse cargo de ellos, con las cuales firmaba un contrato de colocación que tenía por objetivo regular las condiciones de esta adopción de hecho en un tiempo en el que la legislación vigente no incluía esta figura. En muchos casos, esas familias trataban a sus hijos adoptivos como sirvientes. Aquellos a quienes no se les

¹⁷ Para un panorama de las organizaciones caritativas y sus actividades véase Coni (1918b).

encontraba un hogar sustituto permanecían en los asilos de la Sociedad.

El sistema de distribuir niños entre las familias pudientes no se aplicó sólo a los menores abandonados en las ciudades como resultado de la crisis económica, sino que ya había sido utilizado para dar destino a los indígenas de la Pampa y la Patagonia después de que las acciones militares llevadas a cabo entre 1878 y 1879 contra las tribus que habitaban esos territorios, dejaran como saldo 13.000 indígenas reducidos.¹⁸ El gobierno nacional dispuso su distribución en otras regiones del país: los hombres fueron ubicados preferentemente en diferentes unidades del ejército o como trabajadores rurales, en tanto que las mujeres y los niños fueron enviados a las ciudades, sobre todo a Buenos Aires, donde fueron repartidos como sirvientes entre las familias de mayores recursos. En muchos casos, los niños eran separados por sexo y alejados de sus madres. Quienes apoyaban esta política, argumentaban que las mujeres “salvajes” no estaban en condiciones de darles a sus hijos las debidas enseñanzas morales y religiosas, y que para ellos era preferible el servicio doméstico entre cristianos que la vida que llevaban al lado de sus padres. Sin embargo, la prensa se hizo eco de fuertes protestas contra la separación de los niños más pequeños y las autoridades nacionales terminaron ordenando que los repartos se hicieran sin dividir a las familias. Dado que, una vez hecha la entrega, las autoridades se desentendían de la cuestión, es muy probable que quienes recibían a los indígenas no tuvieran inconvenientes para transferir luego a los niños a otras personas si así lo deseaban (Mases 2000).

4. Las leyes de protección a la infancia

La cuestión de los efectos del trabajo sobre la salud infantil (pre)ocupó también a los higienistas, quienes fueron decididos promotores de la reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños. Como había expuesto claramente el doctor Penna en su informe a la Intendencia Municipal (1892), se trataba específicamente de “la protección indirecta a los niños a través de la protección a sus madres”. Esta perspectiva se apoyaba en una idea mucho más amplia: la de que el trabajo

18 Las acciones militares se prolongaron hasta 1885, de modo que la cifra total debe de haber sido mayor.

femenino asalariado fuera del hogar constituía un “desorden” que era preciso subsanar o, al menos, morigerar a través de la legislación. El rol reproductor de las mujeres se convirtió en el elemento legitimador fundamental de esos esfuerzos y la protección de las mujeres y la de los niños fueron tratadas entonces como si fueran una y la misma cosa.

Pese a tal consenso, la sanción de la legislación se demoró bastante. Fueron necesarias muchas iniciativas e informes antes de que la cuestión fuera considerada seriamente por el Congreso Nacional. La cuestión alcanzó más repercusión pública en la ciudad de Buenos Aires, probablemente porque era allí donde se empleaba a más niños en los talleres y las fábricas. Los niños trabajaban sobre todo en la producción de fósforos, cartón, textiles y vestido. En estas dos últimas ramas se empleaban sobre todo niñas. La edad habitual de incorporación al trabajo asalariado rondaba los diez años, momento en el cual los niños obreros abandonaban la escuela después de haber adquirido sólo conocimientos básicos. De acuerdo con los datos oficiales, los niños constituían la décima parte de los obreros ocupados en las fábricas y talleres de la capital. La mayoría trabajaba nueve o más horas diarias, durante las cuales estaban sometidos a malos tratos y diferentes peligros para su salud (Suriano 1990: 251-269).

En vista de los reclamos, el Intendente Municipal Adolfo Bullrich designó en 1901 a Gabriela de Laperrière de Coni inspectora *ad honorem* de los establecimientos industriales que ocupaban a mujeres y niños en esa ciudad.¹⁹ Además de presentar numerosos informes y sugerencias, la inspectora redactó un “Proyecto de ley de protección del trabajo de la mujer y del niño en las fábricas”, que la Intendencia envió al Congreso.²⁰ Según este proyecto, se fijarían los catorce años cumplidos como edad mínima para ingresar a trabajar en fábricas,

19 Sobre la actuación de Gabriela de Laperrière de Coni ver Recalde (1988: I, 75ss.) y Guy (1989: 241-247).

20 El proyecto de Gabriela de Laperrière de Coni no fue el primero que se presentó sobre la cuestión. El Patronato de la Infancia había elevado al Senado un proyecto en 1892 y lo volvió a remitir en 1895 y en 1896. Ese mismo año ingresó otro proyecto a la Cámara de Diputados. En 1899 el secretario del Patronato presentó un nuevo proyecto a esa misma cámara. En 1902 la cámara alta aprobó un proyecto presentado por Miguel Cané y Lídoro Avellaneda, que caducó en la cámara baja por no haber sido considerado en el plazo estipulado (Recalde 1988: I, p. 80).

talleres, usinas o manufacturas. Las mujeres menores de dieciocho y los varones menores de dieciséis años no trabajarían más de seis horas por día. Mujeres y adolescentes gozarían de un día completo de descanso por semana, no podrían trabajar de noche ni ser empleados para realizar trabajos rudos, insalubres, peligrosos, que exigieran esfuerzos corporales o que pudieran comprometer su salud por el contacto con sustancias tóxicas. Igualmente se establecía que llegado el octavo mes de embarazo, las obreras deberían retirarse del trabajo y no podrían volver a él hasta pasadas seis semanas luego del parto. Se disponía la formación de cajas de seguro contra la enfermedad en los establecimientos que ocuparan a más de treinta mujeres, las cuales también financiarían la licencia obligatoria de las parturientas. Las fábricas que emplearan a más de cincuenta mujeres deberían disponer de por lo menos una habitación en perfecto estado de aseo para que las empleadas pudieran amamantar allí a sus hijos dentro de los horarios de trabajo hasta que éstos hubieran cumplido la edad de dos años. Los niños no podrían ser admitidos en las fábricas si no presentaban, además de la partida de nacimiento, un certificado de vacunación y revacunación. Finalmente, el art. 17 establecía que las mujeres y los niños no podrían ocuparse en trabajos que afectaran “la moral” (Laperrière de Coni 1902: pássim).

Si bien el proyecto presentado por Gabriela de Laperrière de Coni no prosperó inmediatamente, la cuestión siguió en el centro del debate y se convirtió en uno de los tópicos centrales que movilizaban conjuntamente los socialistas y los llamados liberales reformistas. El primer intento consistente de imponer una legislación que regulara las relaciones laborales surgió en el contexto de la gran huelga general de 1902. La primera respuesta del Estado ante el movimiento huelguista se redujo a las medidas represivas sancionadas en el marco de la Ley de Residencia, que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo extranjero cuya conducta fuera considerada peligrosa para el orden público.

El “Proyecto de Ley Nacional del Trabajo” presentado entonces por el ministro Joaquín V. González como respuesta más abarcadora que la represión lisa y llana de la agitación obrera fue tratado en comisión pero no aprobado por la Cámara de Diputados. Entre los estudios utilizados por el ministro para la elaboración del proyecto, destaca el exhaustivo informe redactado por Juan Bialet Massé, el cual no deja

ninguna duda acerca de que el trabajo infantil no se reducía en modo alguno a la capital del país. Sus descripciones acerca del empleo de menores en los talleres y las fábricas de la ciudad de Rosario, por ejemplo, en nada se diferencian del cuadro conocido en la ciudad de Buenos Aires (1904: II, pp. 29-37). La participación de los menores de ambos sexos tanto en el trabajo urbano como en las tareas agrícolas es mencionada a lo largo de toda la exposición y justifican su ardiente alegato por la prohibición del trabajo de los menores de quince años, aceptando sólo condiciones de verdadero aprendizaje a partir de los doce (*ibídem*, II, pp. 355-367).

Pese a todos los argumentos, el proyecto de Joaquín V. González fracasó rotundamente en el Congreso. En 1905 se aprobó meramente la Ley 4.661 de descanso dominical –sin obligación de pago de jornal correspondiente–, cuyo ámbito de validez se restringió sin embargo al territorio de la Capital Federal y excluía expresamente el servicio doméstico.²¹ La cuestión de la protección especial para las mujeres y los niños empleados como trabajadores industriales continuó pendiente por dos años más hasta que finalmente se aprobó la Ley 5.291, cuyo principal propulsor, aunque no el único, fue el diputado socialista Alfredo Palacios. El proyecto presentado por este legislador era muy similar al de Gabriela de Laperrière de Coni, pero la sanción de la ley sólo se logró al precio de importantes concesiones a los intereses de los industriales.

Fue así como se impuso la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres y los niños, el descanso dominical, el resguardo de la moralidad y la salud de las mujeres, la prohibición de contratar personal femenino en las industrias peligrosas e insalubres, y se fijaron intervalos de tiempo durante los cuales las madres que habían retornado al trabajo podrían amantar a sus criaturas. Por otra parte, se permitió el trabajo de menores a partir de los diez años de edad –y no de los catorce como propugnaban los socialistas–, y se estableció para ellos una jornada de trabajo de ocho horas, en lugar de seis. Además, las mujeres que acababan de dar a luz podrían dejar de concurrir a su puesto de trabajo hasta 30 días después del parto, pero no se estableció ninguna compensación por la pérdida de ese salario. Muy importante

21 Con respecto al contexto de discusión de los proyectos de la legislación social véase sobre todo Panettieri (1984); Zimmermann (1995) y Suriano (2000).

fue el hecho de que la mayor parte de las disposiciones regían exclusivamente en el ámbito de la Capital Federal, dejando sin protección no sólo a los niños que vivían en la mayor parte del territorio nacional, sino también a los que trabajaban en las grandes fábricas instaladas en los alrededores de Buenos Aires.²² Por último, la ley no incluía ninguna medida con respecto a la protección de las mujeres y los niños empleados en el servicio doméstico o que trabajaban a destajo en su propio domicilio.²³

Si la ley de por sí dejaba ya tantos resquicios a la explotación, su implementación dejaría aún más. De acuerdo con los informes presentados por los inspectores del Departamento Nacional de Trabajo en 1910, en muchas de las fábricas visitadas se ocupaban mujeres y niños en establecimientos con malas condiciones higiénicas y con jornadas de una duración superior a la permitida, no se llevaban los registros de menores que la ley había dispuesto, trabajaban niños que no habían completado aún la escolaridad obligatoria y tanto obreros como patronos parecían desconocer completamente el contenido de las normas legales (Recalde 1988: II, pp. 132-135).

Finalmente, para dar una amplia respuesta a la cuestión de los niños abandonados se sancionó en 1919 la Ley del Patronato de Menores, conocida también como Ley Agote, en referencia a su iniciador. De ese modo, varias de las propuestas que los higienistas porteños habían formulado casi tres décadas antes se extendieron a todo el territorio nacional:

[...] se entenderá por abandono material o moral o peligro moral, la incitación de los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con ladrones o gente viciada o de mal vivir, o que no habiendo cumplido los 18 años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o la salud (art. 21).²⁴

22 Ver “Ley sancionada por el Congreso” en Palacios (1912: 98-101) y “Decreto reglamentario de la Ley” en Palacios (1912: 102-111).

23 Al respecto se sancionó en 1918 una ley extremadamente difícil de imponer en la práctica (cfr. Panettieri 1984: 65-79).

24 Citado según Código Penal (1931: 73).

En esos casos, el Estado se arrogaba el derecho de intervenir el ejercicio de la patria potestad. La ley facultaba a los jueces a disponer “preventivamente” de los menores acusados o víctimas de delitos, en estado de abandono o peligro material y moral. Los niños en tal situación eran separados por mandato judicial de sus familias e internados para su “readaptación” en un establecimiento correccional o de beneficencia, según los casos (art. 14).²⁵

La ley mantuvo excluidas a las mujeres de los tribunales de menores y no les asignó tampoco tareas exclusivas en cuanto al ejercicio del patronato de los menores sometidos a libertad vigilada, defraudando así especialmente las expectativas de las asociaciones feministas que venían bregando para que se reconociera a las mujeres un estatus de expertas en la solución del problema de la “infancia desvalida” y, sobre todo, para que se les asignara un papel institucional en el control de la aplicación de las leyes existentes. El concepto de “paternidad social” parecía triunfar así sobre el de “maternidad social” (Scarzane-lla 2002: 147-157).

5. Infancia y cuestión social

La implantación vacilante de las leyes de protección no fue suficiente para resolver la cuestión de la “infancia desvalida”. En ese contexto, las instituciones caritativas continuaron expandiéndose. Podría decirse incluso que las obras caritativas se retroalimentaban en la medida en que ellas mismas fomentaban la pobreza de sus supuestos beneficiados. En muchos de los asilos se instalaron diferentes talleres en los que trabajaban los niños y adultos allí alojados sin percibir salario, pues los ingresos estaban destinados a la manutención y/o ampliación del establecimiento en cuanto tal.

La activista socialista Carolina Muzilli criticaba esa situación a propósito de las colectas organizadas en el “Día de la niña obrera”:

Hermosas damas y elegantes niñas [...] invocan de los pasantes una “limosna” que ha de aliviar la situación de las obreras explotadas en los talleres de cuanto monasterio existe. [...] es tan mísero el salario de estas pobres mujeres que trabajan en los talleres —en donde hasta hoy día no ha podido penetrar la inspección oficial— que si no tienen algún “santo” especial que las proteja contra la explotación inicua a la que se las

25 Sobre las consecuencias de esta legislación y su evolución posterior véase Larrandart/Otano (1992).

somete, contra la jornada excesiva, contra los salarios de hambre [...] ahí están en cambio las damas que, en pago de la baratura con que fuera confeccionado el ajuar de alguna niña en vísperas matrimoniales, han ideado el día de la niña obrera. [...] estas pobres obreras, doblemente explotadas [...] antes que trabajar para sí, en cada minuto que pasa, apuntalan y enriquecen a las congregaciones, que en virtud de la exención de impuestos y en especial por las causas arriba mencionadas, establecen una competencia ruinosa en la industria y el comercio, competencia que escuda la ambición del patrono de rebajar constantemente el salario de sus obreras (Muzilli 1916: 10).

Fig. 4: Niñas trabajando en la confección de ropas de señoras en el taller de la Casa de Huérfanas

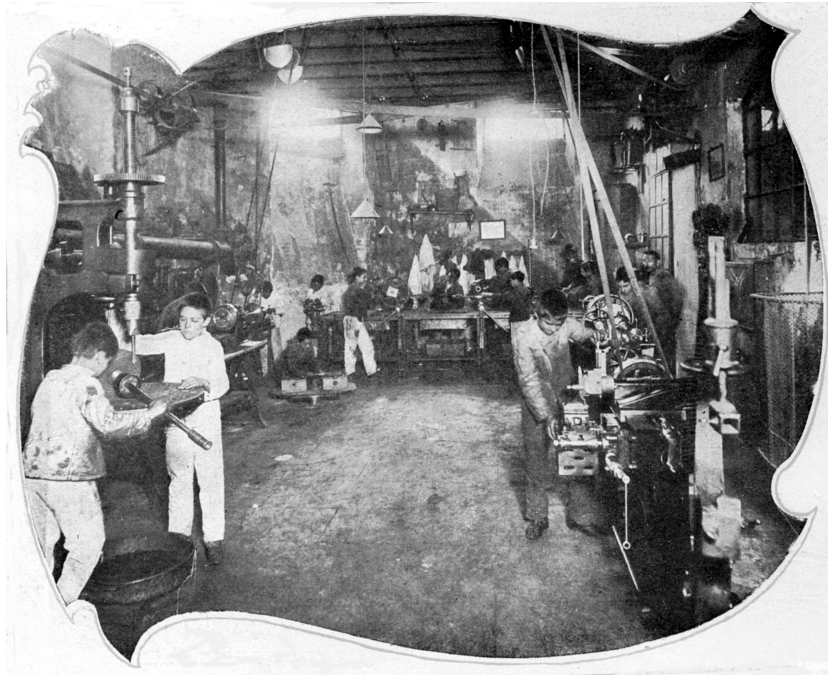


Fuente: Álbum Histórico de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, 1823-1910.

La práctica benéfica implicaba una estrategia de poder de funcionamiento dual. Vista del lado de los sectores dominantes, se presentaba como una estrategia de dominación, integración y control social, en

tanto que vista desde el lado de los sectores medios y de las capas superiores de los sectores populares podría interpretarse como una estrategia de ascenso social, en la medida en que el hecho mismo de practicar la caridad permitía establecer una diferencia con quienes la recibían, cuya situación era tantas veces similar a lo que había sido la propia en el pasado, alimentando así la ilusión de progreso y pertenencia a un estatus social más alto (Ciafardo 1990: 86).

Fig. 5:
Niños trabajando en el taller de mecánica del Asilo de Huérfanos



Fuente: Álbum Histórico de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, 1823-1910.

La cuestión de la infancia fue sin duda un capítulo muy importante de la polémica entablada en torno a la “cuestión social”. Pero a diferencia de lo que sucedía con otros grupos que, como los trabajadores y las mujeres, estaban en condiciones de articular de diferentes modos sus propios objetivos y demandas, en los debates de la época, “los niños”

no aparecían como sujetos sociales sino sólo como objetos pasibles de ser funcionalizados por otros sectores que buscaban legitimarse en su nombre: las instituciones sanitarias, las organizaciones caritativas, los reformadores sociales, las asociaciones femeninas y las agrupaciones políticas.²⁶

Por otra parte, resulta evidente que detrás de la preocupación por la salud de “niños y mujeres” se ocultaba una preocupación más general por la salud del cuerpo social. Como explicaba retrospectivamente Emilio Coni, la “marcada predilección por la infancia” que había caracterizado toda su carrera se debía a que siempre había pensado “que con la atención especial consagrada al niño desde su nacimiento hasta su adolescencia, por parte del médico, se lograría alcanzar una raza fuerte, sana y vigorosa” (1918a: 162).

Al prologar su manual titulado *La salud de mi hijo*, que se publicó casi dos décadas antes de la sanción de la ley de su autoría, Luis Agote había sido aún más claro:

En ningún momento de nuestra historia, la República ha necesitado tanto de hijos fuertes y sanos, capaces por el vigor armónico de su organismo, de vencer los efectos de una crisis, que no sólo es política y económica, sino también esencialmente social. [...] Es de estas ideas que ha nacido este libro, que respetuosamente dedico á las madres argentinas, en mi triple carácter de padre de familia, de médico y de ciudadano (1901: II-IV).

Lejos de apuntar al bienestar de los niños en sí, las iniciativas de protección a la infancia eran vistas por sus propios iniciadores como un acto de patriotismo destinado a corregir los efectos no buscados de la dinámica de la modernización: la difusión de enfermedades, la falta de educación y la deshumanización de las condiciones de trabajo que atentaban contra la capacidad de reproducción de las familias pobres, y por lo tanto de la fuerza de trabajo. Su fin último era asegurar el porvenir de la patria.

26 El Partido Comunista, por ejemplo, comenzó a editar en 1923 una publicación titulada *Compañerito* y a organizar agrupaciones infantiles para que desarrollaran actividades de propaganda. El número 4 de *Compañerito*, publicado al año siguiente, convocaba a los niños a no comprar la revista *Billiken*, que por entonces gozaba de gran popularidad entre el público infantil, como forma de apoyar a los obreros en la huelga que sostenían entonces frente a esa empresa. *Billiken*, por su parte, difundía entre sus pequeños lectores una ideología que colocaba a la caridad en el centro de las relaciones entre ricos y pobres negando la existencia del conflicto social y las luchas de clases. Sobre *Billiken* véase Brafman (s.a.).

Bibliografía

- Agote, Luis (1901): *La salud de mi hijo*. Buenos Aires: Félix Lajoune.
- Álbum Histórico de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, 1823-1910 (s.a.). Buenos Aires: Lit. Bianchi.
- Aráoz Alfaro, Gregorio (1922): *El libro de las madres. Manual práctico de higiene del niño con indicaciones sobre el embarazo, parto, y tratamiento de los accidentes*. Buenos Aires: Cabaut.
- Bialet Massé, Juan (1904): *Informe sobre el estado de las clases obreras en el Interior de la República. Presentado al Excmo. Sr. Ministro del Interior Dr. Joaquín V. González*. Buenos Aires: Imprenta y Casa Editora de Adolfo Grau, 3 vols.
- Brafman, Clara (s.a.): “El revés de la trama. Caridad y conflicto social en el cándido mundo de la infancia. *Billiken* 1919-1930”. En: <http://www.unq.edu.ar/textos_escolares/ponencias2/27.txt> (27.08.02).
- Carli, Sandra (2002): *Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Ciafardo, Eduardo (1990): *Caridad y control social. Las sociedades de beneficencia en la ciudad de Buenos Aires, 1880-1930*. Tesis de maestría. Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- (1992): *Los niños en la ciudad de Buenos Aires (1890-1910)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Coni, Emilio (1892) “Niños en la escuela y en la industria. – Niños maltratados ó en peligro moral”. En: Intendencia Municipal (1892): *Patronato y Asistencia de la Infancia en la Capital de la República. Trabajos de la Comisión Especial*. Buenos Aires: El Censor, 371-400.
- (1918a): *Memorias de un médico higienista. Contribución a la historia pública y social argentina (1867-1917)*. Buenos Aires: Talleres Gráficos A. Flaiban
- (1918b): *Higiene social. Asistencia y previsión social. Buenos Aires caritativo y previsor*. Buenos Aires: Emilio Spinelli.
- (1920a): *La higiene pública en Francia y Argentina*. Buenos Aires: Coni.
- (1920b): *Protección a la madre y al hijo. Puericultura práctica argentina*. Buenos Aires: Coni.
- Eduardo Wilde, 1844-1913 (1914). Buenos Aires: Talleres Casa Jacobo Peuser
- González Leandri, Ricardo (1989): “Médicos, damas y funcionarios. Acuerdos y tensiones en la creación de la Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires”. En: Peset, José Luis (ed.): *Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 77-93.
- (1999). *Curar, persuadir, gobernar. La construcción histórica de la profesión médica en Buenos Aires, 1852-1886*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Guy, Donna (1989): “Emilio and Gabriela Coni: Reformers, Public Health and Working Women”. En: Ewell, Judith/Beezley, William (eds.): *The Human Tradition in*

- Latin America. The Nineteenth Century*. Wilmington, Delaware: SR Books, pp. 233-248.
- (1994): “Niños abandonados en Buenos Aires (1880-1914) y el desarrollo del concepto de la madre”. En: Fletcher, Lea (ed.): *Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX*. Buenos Aires: Feminaria, pp. 217-226.
- (1995): *Sex and Danger in Buenos Aires. Prostitution, Family, and Nation in Argentina*. Lincoln/London: University of Nebraska Press.
- Intendencia Municipal (1892): *Patronato y Asistencia de la Infancia en la Capital de la República. Trabajos de la Comisión Especial*. Buenos Aires: El Censor.
- Kaminsky, Esther (1914): *Puericultura (protección a la primera infancia en la República Argentina)*. Tesis presentada para optar al título de doctor en medicina. Buenos Aires: “La Semana Médica”. Imprenta de obras de E. Spinelli.
- Laperrière de Coni, Gabriela de (1902): *Proyecto de Ley de Protección del Trabajo de la Mujer y el Niño en las Fábricas, presentado a la Intendencia Municipal*. Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional.
- Larrandart, Lucila/Otano, Gabriela (1992): “Desarrollo de los tribunales de menores en Argentina: 1920/1983”. En: García Méndez, Emilio/Carranza, Elías (eds.): *Del revés al derecho. La condición jurídica de la infancia en América Latina. Bases para una reforma legislativa*. Buenos Aires: Galerna, pp. 21-112.
- Ley N° 1420 de Educación Común (8 de julio de 1884). En: <<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf>> (10.03.2003).
- Little, Cynthia Jeffress (1980): *The Society of Beneficence in Buenos Aires, 1823-1900*. Phil. Dissertation. Temple University.
- Lobato, Mirta Zaida (2000a): “Lenguaje laboral y de género en el trabajo industrial. Primera mitad del siglo XX”. En: Gil Lozano, Fernanda/Pita, Valeria Silvina/Ini, María Gabriela: *Historia de las mujeres en la Argentina*. Tomo 2: Siglo XX. Buenos Aires: Aguilar, 95-115.
- (2000b): “Entre la protección y la exclusión: Discurso maternal y protección de la mujer obrera argentina, 1890-1934”. En: Suriano, Juan (ed.): *La cuestión social en Argentina. 1870-1943*. Buenos Aires: La Colmena, pp. 245-275.
- Lozano, Nicolás/Paitoví, Antonio (1925): *La higiene pública y las obras sanitarias argentinas*. Buenos Aires: Coni.
- Martínez, Alberto (1892): “Natalidad y mortalidad infantil”. En: Intendencia Municipal: *Patronato y Asistencia de la Infancia en la Capital de la República. Trabajos de la Comisión Especial*. Buenos Aires: El Censor, pp. 1-22.
- Mases, Enrique (2000): “Estado y cuestión indígena: Argentina 1878-1885”. En: Suriano, Juan (ed.): *La cuestión social en Argentina. 1870-1943*. Buenos Aires: Editorial La Colmena, pp. 301-330.
- Mead, Karen (1994): *Oligarchs, Doctors and Nuns: Public Health and Beneficence in Buenos Aires, 1880-1914*. Phil. Diss. Santa Barbara: University of California.
- (2000): “‘La mujer argentina’ y la política de ricos y pobres al fin del siglo XIX”. En: Acha, Omar/Halperin, Paula (eds.): *Cuerpos, géneros e identidades. Estudios de historia de género en Argentina*. Buenos Aires: Ediciones del Signo, pp. 29-59.

- Meyer Arana, Alberto (1911): *La caridad en Buenos Aires*. Barcelona: Sopena.
- Muzilli, Carolina (1916): *El trabajo femenino*. Monografía premiada con diploma y medalla de plata en la sección Economía Social en la Exposición de Gante, Bélgica, celebrada en 1913. Buenos Aires: Talleres Gráficos L. J. Rosso y Cía.
- Nievas, Rita (1961): "Breve historia de la protección al niño argentino". En: *El Monitor de la Educación Común* 71, 936, pp. 23-27.
- Pagani, Estela/Alcaraz, María Victoria (1988): *Las nodrizas en Buenos Aires. Un estudio histórico (1880-1940)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Palacios, Alfredo (1912): *Por las mujeres y los niños que trabajan*. Valencia: F. Sempere y Compañía, Editores.
- Panettieri, José (1984): *Las primeras leyes obreras*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Penna, José (1892): "Protección indirecta de los niños por la protección de las madres". En: Intendencia Municipal: *Patronato y Asistencia de la Infancia en la Capital de la República. Trabajos de la Comisión Especial*. Buenos Aires: El Censor, pp. 225-266.
- Penna, José/Madero, Horacio (1910): *La Administración Sanitaria y Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires: Guillermo Kraft, 2 vols.
- Piñero, Antonio/Podestá, Manuel (1892): "Protección directa a los niños". En: Intendencia Municipal: *Patronato y Asistencia de la Infancia en la Capital de la República. Trabajos de la Comisión Especial*. Buenos Aires: El Censor, pp. 267-360.
- Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina: Votos del Congreso*, organizado por la Asociación "Universitarias Argentinas" (1910). Buenos Aires: Imp. Fallica y Escoffier.
- Ramírez, Eugenio (1892): "Medidas para prevenir la morbilidad y mortalidad infantiles". En: Intendencia Municipal: *Patronato y Asistencia de la Infancia en la Capital de la República. Trabajos de la Comisión Especial*. Buenos Aires: El Censor, pp. 153-224.
- Recalde, Héctor (1988): *La higiene y el trabajo (1870-1930)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 2 vols.
- República Argentina (s.a.): *Código Civil de la República Argentina sancionado por el H. Congreso de la Nación el 25 de septiembre de 1869 y 7 de agosto de 1872*. Buenos Aires: Imprenta de Pablo Coni.
- (1931): *Código Penal de la República Argentina y Leyes Complementarias*. Buenos Aires: J. Lajoune & Cía – Editores.
- Ruggiero, Kristin (1992): "Honor, Maternity, and the Disciplining of Women: Infanticide in Late Nineteenth-Century Buenos Aires". En: *Hispanic American Historical Review* 72: 3, pp. 353-373.
- Scarzanella, Eugenia (2002): *Ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en Argentina, 1890-1940*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Suriano, Juan (1990): "Niños trabajadores. Una aproximación al trabajo infantil en la industria porteña de comienzos de siglo". En: Armus, Diego (ed.): *Mundo urbano*

- y cultura popular. Estudios de Historia Social Argentina*. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 251-279.
- Suriano, Juan (ed.) (2000): *La cuestión social en Argentina. 1870-1943*. Buenos Aires: La Colmena.
- Veronelli, Juan Carlos (1975): *Medicina, gobierno y sociedad. Evolución de las instituciones de atención de la salud en Argentina*. Buenos Aires: El Coloquio.
- Zauchinger, Adela (1910): *La protección a la primera infancia*. Tesis presentada para optar al título de doctor en medicina. Buenos Aires: J. M. Monqaut.
- Zimmermann, Eduardo (1995): *Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916*. Buenos Aires: Sudamericana.